Globethics Repository



Exclusión y control social [Exclusion and social control]

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content policy of Globethics Repository see https://repository.globethics.net/pages/policy.

Item Type	Article
Authors	Grompone, Romeo
Publisher	Fundación Friedrich Ebert (FES)
Rights	Creative Commons Copyright (CC 2.5)
Download date	2026-11-12 01:49:19
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/219351

Nueva Sociedad Nro 156 Julio-Agosto 1998, pp. 166-179.

Exclusión y control social. Un nuevo mapa peruano

Romeo Grompone

Romeo Grompone: sociólogo, investigador del Instituto de Estudios Peruanos - IEP, Lima.

Palabras clave: exclusión, cambio social, autoritarismo, Perú.

Resumen:
La exclusión social se vincula por lo general a la responsabilidad del Estado en la ejecución de políticas sociales. En el Perú el trato a los excluidos es un mecanismo de control social, en algunos casos sutil y cuidadoso en los detalles, en otros ejerciendo la represión en nombre de la tranquilidad pública. Los excluidos son personas asistidas, clientes sin capacidad de reclamar porque no son convocados como sujetos de derecho o bien integrantes de las clases peligrosas. En la diversidad de sus estrategias el gobierno trata de ganar espacios para un autoritarismo consentido.

La sociedad peruana ha experimentado cambios profundos en los últimos años: se produjo un brusco descenso en la calidad de vida de las clases medias vinculadas al empleo público y privado; procesos de movilidad ascendente en algunos sectores de la pequeña empresa; disminución de los trabajadores asalariados con la consiguiente pérdida de influencia de los sindicatos; surgimiento de un nuevo funcionariado con altos niveles de formación universitaria ocupando puestos a nivel de gerencia en la administración del Estado que reduce competencias y personal; elites empresariales que tratan de adaptarse con variado éxito a las nuevas reglas de la política económica; difusión de valores vinculados al consumo y acceso diferenciado a ellos. En el campo y en la ciudad persisten vastas zonas de pobreza extrema, y superada la etapa de la violencia política se extiende la violencia social.

Lima no es ya la ciudad donde los migrantes andinos consiguieran imponer su estilo. Las nuevas generaciones cambian en sus valores y aspiraciones. En el mundo de la informalidad se ha consolidado un proceso de diferenciación interna con un grupo minoritario que ha conseguido éxito en sus actividades económicas, otros tratando con suerte diversa de alcanzar el mínimo para la sobrevivencia del grupo familiar, y algunos empujados a la marginación.

La exclusión social es asumida en algunos casos como un tema a considerar en las políticas sociales, en otros se vive desde el temor. El gobierno procura establecer relaciones de clientelismo con sectores desorganizados. El aumento en menos de un año de las pandillas juveniles y de bandas armadas de delincuentes se percibe como si una y otra manifestación formaran parte de una misma voluntad y un mismo proceso, cambiando la legislación penal y la estrategia de enfrentamiento. Se busca realizar una represión más eficaz al mismo tiempo que se ejerce un control social sobre los jóvenes pobres, considerados peligrosos antes y más allá de la realización de cualquier acto delictivo.

Sin conexión aparente con estos hechos, la televisión ha cambiado radicalmente poniendo el eje de su programación en las horas dedicadas a los «reality shows». Los planos de la experiencia social que se vinculan a lo cotidiano, punto de referencia para pensar un orden desde el cual sentirse en condiciones de actuar con márgenes de libertad, comienzan a ser vistos a través de situaciones de bloqueo, de malentendidos, de confusión y agresión.

Si bien fenómenos similares se produjeron en otros países de América Latina, lo que llama la atención es la vertiginosidad con que en el Perú han ocurrido estos cambios y cómo se superponen unos con otros. En este escenario cobra un fuerte protagonismo el Ejecutivo, tanto en el plano más visible de instauración de un principio de autoridad como en una dimensión más subjetiva, dando criterios para la inteligibilidad de lo social cuando las otras estructuras de mediación han perdido relevancia y la comunicación personal con aquellos que pertenecen al entorno inmediato del interlocutor está signada por la desconfianza o el riesgo.

Entre el clientelismo y la exclusión

En los últimos años creció el gasto social, disminuyendo la pobreza en términos relativos y aumentando en números absolutos. La ejecución de las políticas sociales corre por cuenta del Ministerio de la Presidencia, que junto al de Economía concentra el 52% del presupuesto nacional. Las partidas destinadas a los municipios sólo alcanzan al 3,8% del total. Un conjunto de entidades desconcentradas del poder central se encarga de la construcción de obras de infraestructura, agua y desagüe, construcción de escuelas, asistencia alimentaria, manejo de cuencas. El Ministerio de la Presidencia se apropia progresivamente de competencias que pertenecían a los sectores de salud, educación y vivienda.

Esos fondos de inversión se fundamentan técnicamente a partir de la elaboración de mapas de pobreza y tienden a desperdigarse en una multiplicidad de pequeños proyectos que le otorgan una apreciable visibilidad social. Los criterios ejecutivistas con los que se actúa hacen que la intervención de la sociedad civil, a la que a menudo se invoca, resulte limitada en el tiempo e inexistente en la toma

de decisiones, lo que produce la transformación de los ciudadanos en sujetos «privados» frente a la escuela, el hospital y otras formas de protección social[1].

Estas obras se acompañan con la presencia del presidente, ya sea en la piedra fundamental o en la inauguración. Fujimori recorre incansablemente el país dando la impresión de que aquellos grupos que todavía no han sido atendidos pueden mantenerse en una situación de confiada espera. Las cámaras de televisión siguen el incesante recorrido con que el presidente se presenta en cada lugar haciendo un listado minucioso de lo que la población demanda, utilizando al mismo tiempo este contacto privilegiado para pronunciarse sobre la coyuntura política, convirtiendo así cada visita en un acontecimiento de proyección nacional.

Weyland entiende que las políticas de ajuste no eliminan, en una etapa más avanzada, medidas de distribución dirigidas a una población desorganizada que ya ha tomado distancia respecto al conjunto de la clase política. Se establece un vínculo directo, sin mediaciones, intransferible entre gobernante y masas desorganizadas que reconocen su autoridad; ello identificaría un escenario neopopulista[2]. Sin embargo, a diferencia del populismo histórico –erosionado por razones económicas y políticas que hacen inviables un desarrollo centrado predominantemente en el Estado– no existe en gobiernos de las características de Fujimori una aspiración que los sectores populares a quienes se presta ayuda se incorporen al juego político promoviéndose vínculos sustentados en expectativas recíprocas. El populismo histórico se basaba, es cierto, en relaciones asimétricas; pero no por ello los sectores participantes dejaban de integrarse a un pacto social donde gobernantes y clases medias y populares se prestaban legitimidades unos a otros. El cliente populista se encontraba en condiciones de reclamar y pedir el cumplimiento de lo pactado. En el escenario actual, la marginación de las nuevas clientelas les quita espacios de intervención formulando solamente solicitudes puntuales. Estamos ante un público con escasos niveles de estructuración que conoce los límites que se han impuesto a sus reclamos. No se pretende una incorporación de los actores sociales, recurriendo a una movilización controlada en la que éstos al mismo tiempo que establecen su dependencia respecto al poder van reconociendo sus capacidades de influir en las decisiones políticas. Sin embargo, si bien estos nuevos grupos marginados carecen de las exigencias de los actores tradicionales del populismo, como contrapartida su adhesión no termina nunca de consolidarse y requiere una y otra vez de intervenciones reconocidas del poder político.

El mayor éxito de una política focalizada en situaciones de extrema pobreza desde el punto de vista de este gobierno no es el intento de aliviar tensiones y consolidar apoyos, sino de descalificar por ineficaces, las propuestas de la oposición. La centralización de recursos promueve en algunos casos demandas regionales y

---

[1] Eduardo Ballón: Fondos de compensación social: perspectiva comparativa en América Latina, Deseo, Lima, 1997.

[2] Kurt Weyíand: «Neopopulismo y neoliberalismo en América Latina: afinidades inesperadas» en ***Pretextos*** Nº 10, Deseo, Lima.

provinciales, pero que no derivan en dinámicas de movilización de largo alcance. Estos intentos pierden asidero por el mismo desinterés del gobierno en promover nuevos criterios para la distribución del gasto social. Por el contrario, el Ejecutivo camina los primeros pasos para crear un movimiento llamado Vamos Vecino, con presencia a nivel nacional. Los líderes sociales que aspiran a ser alcaldes o regidores se encuentran ante una disyuntiva. Si apoyan a Fujimori contarán con recursos que le darán relativa eficacia a su gestión, pero su tarea dependerá de las decisiones imprevisibles e inconsultas de la autoridad a la que otorgan su confianza. Si por el contrario apuestan por razones de principio a la descentralización, corren el riesgo de ser marginados por el gobierno central y por consiguiente en zonas donde predomina la pobreza –lo que impide generar significativos recursos propios–; están condenados a la irrelevancia, o aun a suscitar actitudes de rechazo entre sus potenciales electores. La mayoría de los liderazgos sociales asumen la primera opción, apoyar a Fujimori, aun cuando no estén convencidos de su política y hasta prefirieran, si se dieran otras circunstancias, definirse como opositores. La exclusión social genera necesidades que no consiguen articularse en demandas de largo plazo. La autonomía para los actores sociales es una opción que los confronta con el riesgo de quedar aislados. Fujimori puede ir así estableciendo redes de vinculación relativamente estables a lo largo de todo el país sin necesidad de plantearse la afirmación de la estructura formal de una organización política. Bajo estos parámetros, puede ocurrir que algunos antiguos dirigentes que se destacaron en partidos políticos de distinta orientación, incluidos los de izquierda y que abandonaron sus organizaciones, busquen esta vinculación laxa con el gobierno y éste controle la situación sin tener que dar cuenta de sus actos ni estar obligado a hacer concesiones a quienes son sus aliados. El centralismo y la exclusión en ausencia de partidos y otras mediaciones conduce a una aceptación resignada del orden de cosas existente y a la disposición a integrarse a los reducidos espacios que el poder abre y controla al mismo tiempo.

Los jóvenes como amenaza

Durante los últimos años han crecido las pandillas juveniles y las «barras bravas» de los equipos de fútbol en los antiguos barrios populares y en las barriadas de los conos de Lima. Como en otras sociedades de América Latina estos grupos desarrollan una lucha simbólica por la administración de su propia identidad, interiorizando los estigmas con que se los descalifica –ser violentos, agresivos, en ocasiones discriminados racialmente– transformándolos en un emblema o un mecanismo de identificación. El territorio es el espacio controlable ante una sociedad compleja a la que no pueden integrarse y que perciben insegura y amenazante. Generan en su interior liderazgos informales que pueden renovarse en un corto periodo, utilizan códigos de comunicación relativamente sofisticados, acuerdan rituales de iniciación y se sirven de la impugnación irónica o inversión lúdica para establecer sus diferencias respecto a los discursos dominantes[3].

[3] Rossana Reguillo: En la calle otra vez. Las bandas: identidad urbana y usos de la comunicación, Iteso, Guadalajara, 1995.

En un estudio de observación participante de una pandilla de Lima, Santos encuentra fisuras en las relaciones entre sus integrantes. A menudo sienten que no son escuchados por los otros y que el vínculo que los une está sujeto a un permanente cuestionamiento y expuesto a una precaria reafirmación. Las dificultades de comunicación al interior del grupo y con los jóvenes no pandilleros de su barrio crea una distancia que los lleva a lastimarse y humillarse entre ellos; esta escisión precipita un conflicto y el conflicto aumenta la escisión, creándose así una dinámica de desencuentro de la que no pueden escapar[4].

Las barras bravas de los clubes de fútbol, integradas mayoritariamente por jóvenes, se han organizado en distintos sectores de la ciudad. Estos grupos tienen definidos sus puntos de encuentro para asistir a un partido, realizan ceremonias previas que pasan por el consumo de ron o marihuana, recorren las calles hasta el estadio atentos al sitio donde pueden toparse con sus adversarios –los partidarios de un equipo rival– eligiendo según los casos el enfrentamiento violento o el desvío. En el estadio cada grupo procura demostrar ser el primero en gritar y descalificar al adversario. Los enfrentamientos violentos en la calle y en las tribunas van conformando una historia compartida del grupo y una vivencia de comunidad. Como señala un testimonio recogido por Castro «la U (Universitario de Deportes) es un círculo redondo, tiene un significado, es universal»[5]. Pertenecer a una barra brava es el referente integrador que anula a los otros y sitúa a los jóvenes al margen de presiones, compulsiones y bloqueos que en distintos espacios de comunicación confrontan inevitablemente.

Algunos integrantes de estos grupos incurren en el robo en pequeña escala y a desmanes en espacios públicos. En muchos casos la finalidad no se orienta a obtener un beneficio económico; el robo puede ser motivado por la compulsión de poder dilapidar lo obtenido en el fin de semana para vivir por un tiempo la sensación de disponer de un poder sin aparentes limitaciones y ganarse el reconocimiento de sus compañeros. Otros casos se acercan a la caracterización que hacen Fitoussi y Rosanvallon de un tipo de transgresión en la que no importa la ganancia económica sino el beneficio identitario expuesto ante sus pares –y sobre todo frente a los adultos, a quienes se les impone con este acto la objetivación de una confrontación[6]. Ella se expresa en paredes pintarrajeadas, vidrios rotos, espejos retrovisores arrancados, hurtos menores y escándalos nocturnos. Constituyen respuestas a mensajes contradictorios enviados desde la sociedad, en los que se conmina a los jóvenes a respetar las normas existentes y a asumir su responsabilidad como individuos en un mundo sin reglas.

---

[4] Martín Santos: Vergüenza, humillación y conflicto en grupos de pandilleros de un barrio popular de Lima, Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales, Lima, 1998.

[5] Raúl Castro: ***Un día de partido. Comunidades y rituales en la Trinchera Norte***, Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales, Lima, 1998.

[6] Jean-Paul Fitoussi y Pierre Rosanvallon: ***La nueva era de las desigualdades***, Manantial, Buenos Aires, 1997.

Los jóvenes de pandillas y barras no están atravesando una fase de moratoria social en la que salidos de la infancia y todavía no integrados al mundo adulto se encuentran relativamente abiertos a jugar con diversas opciones y socializarse poco a poco en los roles que se les va a asignar para finalmente elegir, disfrutando mientras tanto en su plenitud una etapa de tránsito. Las conexiones entre la experiencia de vida y el sistema social no pueden asentarse. En efecto, en el Perú para vastos grupos las instituciones han dejado de establecer pautas normativas, control social y definiciones a partir de los cuales implantar criterios de integración o de elaboración de antagonismos. La exclusión impide pensar en los otros, creando un mundo autorreferencial que dificulta definir estrategias de acción que vayan más allá de la recreación de lo existente. En las familias de los grupos marginados es frecuente la ausencia física y afectiva del padre, y en general los progenitores no disponen de tiempo o no se preocupan por acompañar el desarrollo del niño. Falta entonces una estructura psíquica que cohesione las corrientes agresivas mientras que los afectados pasan, sin que perciban lo abrupto del cambio, de la pasividad y la apatía a la agresividad[7].

Por su parte, los docentes mal remunerados carecen de incentivos para enseñar; progresivamente van descalificándose y comparten con sus alumnos el descrédito acerca de los contenidos de la enseñanza. En los colegios nacionales se oscila entre la indiferencia, las sanciones y a veces el castigo físico. La brecha entre los establecimientos educativos públicos y los colegios privados de elite se ahonda cada vez más sin que estas diferencias susciten preocupación por el gobierno ni manifestaciones adversas en la sociedad.

Tampoco el mundo del trabajo resulta una expectativa que los jóvenes de los sectores populares vean con entusiasmo. Las contadas oportunidades ocupacionales se encuentran en empleos eventuales o en la proliferación de los llamados «services», con los que para ahorrar costos las grandes empresas derivan tareas a las pequeñas, rubros desprotegidos por la legislación laboral. El 12% de los jóvenes que forman parte de la población económica activa está desempleado, y entre quienes tienen un puesto de trabajo el 56% está sub-ocupado[8].

La irrelevancia de las instituciones empobrece los lazos sociales. Las vías para pensar en los otros se han cerrado. No cuentan los maestros, los empleadores, los compañeros de trabajo, otros estudiantes. El mundo de los jóvenes excluidos se caracteriza por la contigüidad de los vínculos que restringe un pensamiento ordenado sobre la sociedad. La impersonalidad de las relaciones que generalmente se asocia a la vida de las grandes ciudades para ellos no es una experiencia que les concierne. El enemigo está cerca. Son los jóvenes no pandilleros o de otras pandillas, es el partidario de un equipo de fútbol rival. En ocasiones estas percepciones derivan hacia un difuso ánimo anti-institucional que

[7] César Rodríguez Rabanal: La violencia de las horas. Un estudio psicoanalítico sobre la violencia en Perú, Nueva Sociedad, Caracas, 1995.
[8] Luis Femando Cisneros: ***Los jóvenes en cifras***. Congreso de la República, Lima, 1998.

se expresa contra la policía, a la que se enfrenta tomando precauciones para no correr riesgos, o increpando a los dirigentes del equipo cuando su club es derrotado.

Desde esta perspectiva debe revisarse la idea de ritual como mecanismo de creación de un sentimiento comunitario en los jóvenes que integran barras bravas y pandillas. Daría la impresión de que estos rituales surgen más por el reconocimiento de una situación de marginalidad que por el intento de sellar la cohesión del grupo. En efecto, no parten de criterios impuestos desde la sociedad para interpretar su propia cultura y reproducir un orden[9]. Cambia entonces radicalmente su orientación. No es la compulsión impuesta de un sistema, sino que se encuentra sujeta a la improvisación y puede ir modificándose en plazos muy cortos. Autónomos de alguna tradición, los rituales derivan en una actuación social para intentar descifrar el presente y darle al participante un lugar reconocido. No se está pensando en una transición ordenada de etapas de vida que otorga elementos para una narrativa en términos de biografía personal, en la que el presente pretenda ser una marca impuesta en una trayectoria con capacidad de imaginar escenarios futuros.

El sentimiento de comunidad plasmado en estos términos garantiza una pertenencia que al mismo tiempo denota también las dificultades para establecer vínculos de tipo contractual en el amplio sentido del término, con las instancias de diálogo, negociación y confrontación con otros interlocutores que estos vínculos suponen.

La exclusión social se manifiesta en un plano diferente y más radical en el crecimiento acelerado de bandas, pertrechadas con armas de guerra y que usan uniformes militares o policiales, comprometidas en robos, asesinatos y secuestros. La respuesta del gobierno ha sido tipificar jurídicamente algunos de estos delitos como terrorismo agravado, extender la duración de las penas, acelerar los procedimientos de instrucción y condena, darle intervención en las investigaciones al Servicio de Inteligencia Nacional, establecer el juzgamiento por tribunales militares, disminuir la edad de imputabilidad de los 18 a los 16 años y dictar también disposiciones especiales para el caso de las pandillas y barras bravas, considerando la responsabilidad de los niños y adolescentes que intervienen en ellas y las medidas punitivas a aplicarse. El terrorismo agravado comprende a quienes integran bandas organizadas, al uso de explosivos, la utilización de uniformes policiales y militares e incluye a quienes suministren información que facilite la realización de estos actos.

En todos estos casos se considera la posibilidad de la cadena perpetua. Se amplía la etapa de investigación policial de 24 horas a 15 días y se remite lo actuado a la Justicia Militar para que decida.

---

[9] Clifford Geertz: ***La interpretación de las culturas***, Gedisa, Barcelona, 1992.

Temas antes entendidos como de seguridad ciudadana son ahora considerados de «seguridad nacional», asimilándose la situación de la delincuencia organizada a la que actúa según móviles políticos. Los tribunales castrenses asumen competencia en delitos en los que no pueden intervenir adecuadamente por su falta de formación jurídica y por el tipo de transgresiones que deben considerar. Si además se tiene en cuenta el carácter sumario de los procedimientos y la rebaja o la disminución de la pena por delación, muchos inocentes serán encarcelados tal como ha ocurrido en el periodo de auge de la violencia política –lo que ha obligado a la formación de una Comisión de Indultos que sólo ha conseguido reparar parcialmente el daño causado.

Pensando en los jóvenes se legisla sobre las denominadas «pandillas perniciosas», que son las que se reúnen para agredir a terceras personas, lesionar su integridad física, dañar bienes públicos o privados u ocasionar desmanes que alteran el orden público. A los mayores de 12 años y menores de 16 que integran estos grupos se los recluirá en establecimientos «socioeducativos» que no existen todavía en el país. Las disposiciones permiten una interpretación amplia y no distinguen entre la pertenencia a una pandilla y la comisión de determinados actos. Estos hechos asimismo se describen de una manera deliberadamente genérica. La reunión de jóvenes en una esquina, una transgresión ocasional de adolescentes ebrios, la concurrencia a un estadio para alentar a un equipo cerca de quienes actúan violentamente y también la participación en una manifestación política, colocan a los protagonistas en condición de sospechosos afrontando las perspectivas de una sanción. La concepción garantista de derechos que contempla el Código del Niño y el Adolescente, y la legislación comparada sobre el tema, son sustituidas por la represión. La delación como recurso para moderar las penas extiende una sensación de temor y amenaza en el centro mismo de la vida cotidiana porque potencialmente cualquiera puede convertirse en acusador o acusado.

El delito se ha extendido en Lima, y el gobierno quiere exacerbar la idea del riesgo y la vulnerabilidad de sus habitantes. La única información confiable sobre el tema es una encuesta de victimización realizada por el Instituto Nacional de Estadística en febrero de 1998[10]. Durante el año 1997 el 12% de los entrevistados declaró haber sufrido un hurto en su vivienda, el 18,5% robo a personas, el 23% robo a vehículos y autopartes, el 2% agresiones físicas y el 1,1% actos de vandalismo. En el caso de robo a vivienda, el 5,4% han sido cometidos por pandillas y el 47,9% por delincuentes; en robo a personas los porcentajes son de 12,3% y 53% respectivamente; en el robo de vehículos y autopartes corresponde a pandillas el 6,3% y a delincuentes el 71,3%; en agresiones físicas el 26,4 y el 6,3%; y en el vandalismo se atribuye a pandillas el 75,7% de los casos y a delincuentes el 2,5%. Salvo en el caso de robo a vehículos y autopartes, la mayoría de los delitos de acuerdo a esta misma investigación ocurre en barrios populares. Los más pobres son las principales víctimas y victimarios. Las pandillas sólo intervienen significativamente en agresiones físicas y en especial en vandalismo que son

[10] ***Encuesta de hogares sobre victimización en Lima Metropolitana***, INEI, Lima, 1998.

además, como se ha visto, los delitos menos generalizados. Por otra parte, el 50% de víctimas de estas transgresiones de los jóvenes son otros jóvenes, como surge de la misma investigación. Lima por fortuna todavía no tiene sicarios juveniles ni la participación en una pandilla es necesariamente una etapa previa al ingreso en la delincuencia organizada como se intenta demostrar. Si el problema parece entonces remitirse a actos de vandalismo, y si identificando con relativa facilidad a los participantes podría focalizarse para que una política de prevención obtenga logros significativos, ¿por qué no quiere actuarse en esta dirección?

Estas medidas que se toman por una delegación de facultades del Legislativo al Ejecutivo y que dan intervención al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) parecen responder a dos razones. Una es de corto plazo: informar selectivamente del desmantelamiento de bandas y ganar el gobierno y el SIN créditos políticos; la otra pasa por crear los engranajes de un régimen autoritario en el que al mismo tiempo que se ignoran las instituciones del Estado de derecho comienzan a coparse espacios en la sociedad. Esto va mucho más lejos y responde a propósitos distintos de una simple «huida al derecho penal fetichista y simbólica» por encargarle problemas que este sistema no puede resolver, tal como ha señalado Ugaz[11].

El SIN ha participado en violaciones comprobadas de los derechos humanos, entre ellos el asesinato de docentes y estudiantes de la Universidad de la Cantuta y de participantes en una reunión social en la zona limeña de Barrios Altos; es responsable del crimen de la agente de la propia institución Mariela Barrete y la tortura de otra, Leonor La Rosa; interviene en el amedrentamiento selectivo de periodistas y opositores y se le responsabiliza de una extendida interceptación telefónica. Quizás puede pensarse en un disciplinamiento en el que, como describe Foucault, el poder policiaco «es un aparato que debe ser coextensivo al cuerpo social entero y no solo por los límites extremos que alcanza, sino por la minucia de los detalles de los que se ocupa»[12]. Sin embargo en el Perú el orden que se propone no necesita de un aparato que crezca desmesuradamente. El temor alienta la delación. La sociedad se separa y se polariza ya que en cualquier momento puede pensarse en una intervención del SIN y sólo quedan como alternativas comprometerse con él o aislarse. El poder va a contar con una red de colaboradores obligados. La calidad de las relaciones personales son afectadas en el mutuo involucramiento y en la solidaridad. Por otra parte, el ejercicio de la actividad de castigo y penalización puede graduarse según las coyunturas, dejando actuar u optando por la represión selectiva o generalizada porque la latitud de las reglas impartidas deja abiertos los márgenes a la discrecionalidad.

La condición de pobre, joven o mestizo hace a la persona sospechosa y le restringe los espacios para moverse. Las barreras impuestas por la segregación urbana y garantizadas en algunos barrios por guardias privados, aparecen como precauciones benignas comparadas con la inminencia de la intervención del

[11] José Ugaz: «Fetichismo y seguridad ciudadana» en ***Ideele*** N° 107, Lima 1998.
[12] Michael Foucault: ***Vigilar y castigar***. Siglo XXI, México, 1976.

Estado. La exclusión ya no es una falla en el tejido social, una evidencia de las relaciones de la desigualdad, sino que se la percibe desde la perspectiva de las clases peligrosas. La convivencia amenazada hace que los interlocutores en los que se pueda confiar sean unos pocos conocidos o quizás sólo la familia que ya está sufriendo un proceso de desestructuración. O finalmente el recurso al Estado. La comunicación bloqueada impide la plasmación de mediaciones sociales y políticas, aunque el gobierno puede señalar que formalmente no las impide.

Cambios en la informalidad y nuevo espacio público

La informalidad ha sido un tema privilegiado en las ciencias sociales peruanas para entender el mundo popular. Una corriente significativa ha enfatizado el surgimiento de un empresariado migrante en Lima que ha conseguido éxito económico y desplazado a las clases medias tradicionales urbanas que dependen del empleo público y del sector privado. Estos migrantes utilizan como «caja de herramientas» las pautas culturales de la economía andina, entre ellas la organización familiar, la disposición a trabajar en conjunto, de diversificar sus tareas con extrema flexibilidad y utilizar redes personales como criterio exitoso para intervenir en el mercado. Los lazos establecidos permiten el intercambio de información, transacciones, ayuda mutua. En este entramado de relaciones están surgiendo liderazgos sociales conformados por personas que han conseguido destacarse en su actividad y que proporcionan, en marcos informales de relación, criterios de interpretación y decisión no solo acerca de opciones comerciales sino en temas sociales y políticos. En el Perú este grupo disperso en el espacio y situado en puntos estratégicos, constituido por comerciantes, talleristas exitosos y transportistas, articulan campo y ciudad; hacen, deshacen, vuelven a reiniciar vínculos; crean sentidos comunes compartidos. Y recrean o innovan la tradición, proponiendo normas y pautas institucionales que ayudan a ordenar conductas y expectativas.

Estos sujetos se sienten responsables, entienden que con su trabajo benefician a otros, dan ocupación, enseñan una tarea, cualidades que los distinguen y a partir de las cuales elaboran sus diferencias. Las instituciones son percibidas como irresponsables y amenazantes porque no son imparciales ni transparentes y las normas se alteran arbitrariamente atendiendo a recursos e influencias. Esta desconfianza institucional les hace privilegiar las relaciones cara a cara. Se consideran sujetos de derecho a quienes se les niegan las condiciones de ejercerlos en toda su extensión[13]. Algunos autores llegan a señalar que la emergencia de estos pequeños empresarios consigue romper la jerarquización étnica, por cuanto han recorrido sus propias vías para acceder a la modernidad preservando su autonomía e imponiendo un estilo de vida que se sustenta en el trabajo disciplinado y su capacidad de iniciativa económica[14]. Portocarrero llega a

[13] Hortensia Muñoz y Yolanda Rodríguez: ***Responsabilidad y reconocimiento desde el mundo del trabajo en la microempresa***, Instituto Antonio Ruiz de Montoya, 1998.
[14] Jürgen Golte: «Nuevos actores y culturas andinas» en Perú 1964-1994: Economía, Sociedad y Política, IEP, Lima, 1995; y Carlos Franco: Imágenes del Perú. La otra modernidad, Cedep, 1995.

una conclusión opuesta, señalando que «la obsesión por el dinero resulta de una ilusión, una fantasía; de la idea que el éxito económico es una compensación efectiva al 'ninguneo' recibido. Muchas de las carreras empresariales representan intentos finalmente fracasados por afirmarse frente a la exclusión interiorizada como sentimiento de minusvalor. En todo caso la laboriosidad es mucho más común que el éxito empresarial»[15]. Quizás los cambios recientes obligan a introducir matices entre estas posiciones contrapuestas. El 17,3% de los empresarios informales reconoce que sus ganancias son mayores que las necesarias para satisfacer sus requerimientos de sobrevivencia; el resto no consigue salir de una situación de pobreza. Hay señales de un nuevo mapa social en donde migrantes indígenas y mestizos han conseguido posiciones económicas seguras, aunque ello no se traduce en niveles comparables de influencia política. Las elites empresariales comienzan a reconocer en este grupo emergente un actor estratégico en el desarrollo, quizás porque les resulta atractiva la idea de un empresariado popular que por otra parte no pone en cuestión su poder. Cotler señala una paradoja: las clases medias y altas tienen una valoración más positiva de estos micro y pequeños empresarios (59%) que los estratos bajos inferior (41,5%) y superior (49%)[16]. Quizás la explicación se encuentre en que para los grupos de mayores ingresos la emergencia de nuevos productores y comerciantes indica que a través del mercado está ocurriendo un cambio ordenado de la sociedad, donde la idea de la competencia desplaza la del conflicto y se va definiendo una perspectiva de integración sin tensiones sociales ni culturales. En los sectores populares esta valoración positiva es menor. Dos razones parecen explicar el hecho. Son más concientes, por experiencia cercana, de los límites de desarrollo de los pequeños talleres y negocios. Perciben además los bajos salarios que se les paga, la extensa jornada laboral, la ambigua relación entre colaboración y explotación que se establece y que se inclina a esto último cuando un trabajador no es parte del entorno cercano del pequeño empresario.

En Lima comienzan a tener más peso las generaciones de los hijos y de los nietos de los migrantes, sensibles a las presiones y pautas de la vida urbana, entre ellas el rescate del individualismo y la atención a los niveles del consumo como referente social. Estas generaciones hacen un análisis más crítico de las redes existentes. Pareciera que en Lima una vez consolidados nuevos patrones de diferenciación social se restringen las oportunidades de una movilidad ascendente. Muchos de estos recientes actores se encuentran en una tierra de nadie, ya no les sirven las normas de sus parientes y encuentran negadas las perspectivas de acceso a otras nuevas, que la sociedad no está en condiciones de establecer. El marginamiento en las redes informales no tiene como contrapartida la posibilidad de integrarse a otras organizaciones cuando la sociedad civil se encuentra debilitada. El desprendimiento de las relaciones primarias, organizadas en la familia y el parentesco empuja a nuevos grupos a la exclusión y no a la idea de pertenencia ciudadana en una comunidad política. Es más, la política deja de ser

[15] Gonzalo Portocarrero: ***Los nuevos limeños***, Ed. Sur, Lima, 1994.
[16] Julio Cotler: «Los empresarios y las reformas económicas en el Perú» documento de trabajo N° 91, IEP, Lima, 1998.

un referente que les concierne, que va a afectar de alguna manera sus vidas. Los discursos alternativos de los partidos son dejados de lado o simplemente se les desconoce. Quizás la tantas veces mencionada crisis de representación tenga que ver no solo con los errores de las organizaciones políticas y un nuevo clima cultural sino con las dificultades de vastos sectores de la población para vincularse en lazos más amplios y complejos. Lo que se impone como una realidad abrumadora es el mercado, en la que perciben tanto oportunidades como el riesgo de una definitiva postergación, el trabajo en donde no consiguen fijar un horizonte de largo plazo que los haga sentir seguros, los medios de comunicación que los ubica como consumidores incapaces de alcanzar el estilo de vida que se propone salvo en el contenido simbólico que le otorga la adquisición de una mercancía, seña de una identidad que quisieran alcanzar. La cada vez más explícita segregación urbana les indica los lugares en los que pueden estar y en aquellos que serán rechazados por razones sociales, a las que se yuxtaponen discriminaciones étnicas y de género.

Pasada la oleada de los cambios económicos y culturales impuestos por los migrantes campesinos, está surgiendo en Lima un habitante urbano que vive cotidianamente la experiencia de la violencia y la precariedad. Pensando en ellos los medios han creado una nueva agenda. La aparición reciente de programas de informaciones maliciosas sobre figuras de la farándula, la mayoría de ellas surgidas de la televisión, definen los personajes que verdaderamente están importando. Las rivalidades o los ataques personales al interior de este precario sistema de estrellas, es el tema recurrente también de una prensa popular que ha crecido en sus ventas. No se está buscando saber más de los ídolos por un sentimiento de admiración; importa conocerlos en su dimensión conflictiva, en sus secretos, en sus escándalos. El interés por desacreditarlos es la manera de tenerlos cerca en una ilusoria confluencia de circunstancias comunes que pone en peligro o cuestionamiento la vida cotidiana de todos. A diferencia de lo que ocurre en las telenovelas, el sufrimiento no redime sino condena.

En los canales nacionales se ha desatado también una competencia que gira alrededor de los «reality shows», cinco de ellos en la programación diaria, cuatro compitiendo en un mismo horario los sábados por la noche. Los temas tratan por lo general de conflictos entre vecinos de un tugurio, enfrentamientos familiares, prostitutas, ladrones que exponen su caso ante un auditorio que ha sido elegido previamente entre los interesados a concurrir, por su predisposición a involucrarse en la discusión planteada, aconsejar, increpar, protestar. En los inicios de estos espacios intervenía un profesional que trataba de hacer una interpretación de los casos expuestos estableciendo con premura algunos parámetros, donde el medio procuraba dar una imagen de preocupación y seriedad. Ahora el animador o la animadora exacerba la discusión, aludiendo que exponer los problemas de un participante tiene de por sí una dimensión liberadora. La intervención externa ordenadora queda reservada para anónimos funcionarios del canal que separan a quienes se agreden. Estos programas responden a una audiencia donde la curiosidad se orienta hacia quienes transgreden normas y valores socialmente impuestos o se ubican en situaciones límite. En una sociedad que generaliza la

exclusión, los discursos normalizadores, los que preconizan un «deber ser» conservador u orientado al cambio, los intentos de desplegar una lógica argumentativa o que al menos quieren presentarse con estas características, pierden su capacidad de disuasión o disciplinamiento. A los excluidos les interesa reconocer nuevas situaciones en las que se expresan malestar y encono. Es una manera de pensar el vínculo social cuando de la experiencia personal no pueden salir otras alternativas.

La recuperación de la política

Los grupos de extrema pobreza y en condiciones de exclusión son los que prestan mayores niveles de aprobación al gobierno de Fujimori, aunque con tendencia a declinar. En una sociedad desinstitucionalizada se rompen las vías de comunicación entre actores sociales de distinta procedencia, el espacio público pierde extensión y profundidad, y el Estado puede manipular o reprimir las presiones e impulsos de aquellos que están marginados. En el mundo popular existen también relaciones basadas en la solidaridad y en la disposición abierta al reconocimiento del pluralismo y la diversidad. Se entrelazan tradiciones organizativas con nuevas expresiones culturales. La oposición democrática debe llegar a consensos básicos, comprender que los viejos partidos no pueden recuperar su capacidad de convocatoria y crear movimientos políticos flexibles en su organización y con voluntad de llegar al conjunto de la sociedad. En esta línea uno de los retos es que los sectores populares, que han vivido una experiencia de democratización y son conscientes de sus derechos ciudadanos, se integren a este proceso y establezcan las vías para llegar a este mundo de la exclusión que conocen de cerca. Se requiere voluntad política, lucidez y un sentimiento de urgencia porque la lógica y los dispositivos del autoritarismo van ganando terreno desde la persuasión o el temor.



La ilustración acompañó al presente artículo en la edición impresa de la revista.